
jugando a la política con el terror: el caso del Perú de Fujimori*

jo-marie burt

Al asumir la presidencia del Perú en 1990 Alberto Fujimori tuvo que afrontar muy grandes desafíos, tanto económicos como políticos. Siendo un político novel y careciendo de un verdadero partido desde el cual formar un gobierno, enfrentó a un ejército turbulento, dos movimientos insurgentes, hiperinflación galopante y un vasto descontento social volcado en las calles. Asimismo, las Fuerzas Armadas del país estuvieron inquietas ante su triunfo pues desconfiaban de él. Sus promesas de implantar una reforma económica gradual fueron dejadas de lado cuando sus asesores le urgieron adoptar severas medidas de austeridad. Al poco tiempo de iniciado su gobierno adoptó plenamente el modelo económico neoliberal que él había cuestionado durante su campaña política.

Las medidas fujimoristas de «ajustar el cinturón»—conocidas popularmente como el *Fujishock*—controlaron la inflación. Asimismo, cumplió la promesa de reasumir los pagos de la deuda externa que tenía el Perú con los acreedores extranjeros. Ello le ganó aliados tanto en las instituciones financieras internacionales como en el gobierno norteamericano. Debido a ese acercamiento el gobierno recibió fuertes flujos de dinero en efectivo. Sin embargo, los peruanos seguían escépticos: la recesión no menguaba, había una escalada de violencia al punto tal que los analistas políticos hablaban de una probable victoria insurgente y el gobierno parecía haber perdido la brújula.

Frente a esa situación, el 5 de abril de 1992 Fujimori anunció su decisión de disolver el Congreso y suspender la Constitución de 1979. Afirmó que esas medidas de emergencia eran necesarias para erradicar la corrupción, lidiar con el narcotráfico y eliminar la subversión. «El caos y la corrupción, la falta de identificación con los grandes intereses nacionales de algunas instituciones

* Este artículo fue originalmente publicado en inglés en: *Playing Politics with Terror: A User's Guide*, editado por George Kassimeris (Columbia University Press, 2007, pp. 62-100). Traducido por Carlos Chang Cheng. Revisado por Guillermo Rochabrún con la colaboración de Omar Manky y Oscar Destouet.

fundamentales, como el Poder Legislativo y el Poder Judicial, traban la acción de Gobierno orientada al logro de los objetivos de la reconstrucción y el desarrollo nacionales». En el discurso ante la nación del 5 de abril,¹ Fujimori proclamó un «Gobierno de Reconstrucción Nacional», y aseguró a los ciudadanos que en un lapso de tres años los movimientos insurgentes serían completamente eliminados. El llamado «autogolpe», que fue apoyado por las Fuerzas Armadas, tuvo un inmediato respaldo popular: 80% de peruanos aplaudieron esta decisión, luego de estar hastiados de una década de violencia y crisis económica, desilusionados por el fracaso de las élites de los partidos políticos al no haber podido resolverlas.

Aun así, la violencia continuaba imperando. El Partido Comunista del Perú conocido como Sendero Luminoso, grupo insurgente maoísta que en 1980 había declarado una «guerra popular prolongada» contra el Estado peruano, lanzó una serie de violentas campañas en Lima, que desconcertaron a todos los peruanos. Una vez más la popularidad de Fujimori empezó a decaer.² Comenzaron a correr rumores en los pasillos del Congreso norteamericano sobre la necesidad de incrementar la influencia norteamericana en el Perú, con la finalidad de evitar una victoria senderista.³

El 12 de septiembre de 1992 la situación cambió drásticamente para Fujimori. Abimael Guzmán, el principal líder, ideólogo y estratega de Sendero Luminoso, fue arrestado junto con tres altos miembros de la cúpula senderista. La popularidad de Fujimori se disparó.⁴ Los peruanos respiraban por fin tranquilos, esperanzados que la captura de Guzmán significaría el fin del conflicto interno, que tuvo un costo humano aproximado de setenta mil vidas⁵ y costos materiales de miles de millones de dólares. Asimismo había la ilusión de que el Perú retornaría al camino democrático con las elecciones de un nuevo cuerpo legislativo en noviembre del mismo año. Fujimori concedió a regañadientes la instauración de un nuevo Congreso, luego de que la presión internacional criticara el autogolpe y pusiera en jaque las relaciones entre el Perú y la comunidad financiera internacional.

Sin embargo, Fujimori no aprovechó esa oportunidad para consolidar y finalizar el conflicto interno y reestablecer un gobierno democrático en el Perú. Al contrario, junto a sus aliados politizó la guerra contra el terror, para de este modo consolidar su proyecto autoritario y perpetuarse en el poder.

Este artículo explora los mecanismos utilizados por el régimen fujimorista, de cómo jugó a la política del terror, utilizando el miedo latente en la sociedad peruana luego de años de violencia. Analiza las graves consecuencias que tuvo

¹ Agence France-Presse, 6 de abril de 1992.

² El índice de aprobación a Fujimori se incrementó luego del autogolpe a un 82%, pero disminuyó a un 56% a inicios de setiembre. Información de la consultora de opinión y mercado, Apoyo.

³ Por ejemplo, véase la declaración del Asistente del Subsecretario de Estado para Asuntos Interamericanos, Bernard Aronson, ante el Congreso norteamericano (Subcomité de Asuntos del Hemisferio Occidental) el 12 de marzo de 1992.

⁴ De acuerdo con la encuesta de Apoyo, la popularidad de Fujimori se incrementó al 74% después de la captura de Guzmán.

⁵ Esta es la cifra de personas muertas por causas políticas entre 1980 y 2000 según la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) sobre la base de una proyección estadística (CVR 2003). Está disponible en línea: <www.cverdad.org.pe>.

la manipulación del miedo para la democracia peruana, los derechos humanos, y la misma «guerra contra la subversión».

Se inicia con un breve análisis del evento más importante de la lucha contrainsurgente en el gobierno de Fujimori: el arresto de Guzmán. Pone en evidencia cómo este hecho se convirtió en la pieza clave de un discurso oficial que proclamaba las virtudes de la política autoritaria del régimen de Fujimori, así como el triunfo de las Fuerzas Armadas contra la subversión. Frecuentemente Fujimori y sus aliados esgrimieron este discurso a lo largo de la década de 1990, para recuperar la autoridad del régimen en momentos en que pasaba por etapas críticas; para ganar las elecciones; y para intimidar a la oposición.

Para ilustrar los mecanismos utilizados y discernir sus consecuencias políticas, examinaremos cuatro instancias específicas en las que el régimen fujimorista instrumentó con fines políticos la guerra contra el terror. Primero, se analiza cómo el régimen instigó y luego manipuló el llamado que hizo Abimael Guzmán y otros altos dirigentes senderistas para realizar conversaciones de paz con el gobierno. Esto se convirtió en el caballo de batalla del régimen durante la campaña para la aprobación de una nueva Constitución hecha a la medida de Fujimori, y que permitiera su reelección.

En segundo lugar se examina cómo el régimen elaboró un discurso y una práctica que buscaba exagerar la amenaza de un rebrote terrorista, sobre todo a partir de 1995, cuando los niveles de violencia habían decrecido notablemente. El objetivo de ese discurso era conseguir beneficios políticos en las elecciones presidenciales de 1995, donde Fujimori postulaba para la reelección. Por eso el gobierno desplegó una masiva operación contrainsurgente —la Operación Aries—, un espectacular y sangriento esfuerzo propagandístico que se centraba en resaltar los aciertos y la importancia del liderazgo de Fujimori en la guerra contra el terror, así como la campaña «vale todo» del régimen para eliminar cualquier vestigio terrorista, ya que, según ellos, se necesitaba cinco años más de Fujimori en el gobierno.

Luego se analiza la toma de la residencia del embajador de Japón por una columna militar del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA), y cómo esta sorprendente crisis de los rehenes, que duró cuatro meses, tuvo un papel preponderante en el discurso antiterrorista del régimen. Además, sirvió como chivo expiatorio para que el gobierno impusiera medidas más severas, a pesar de que la violencia política había disminuido significativamente. Como resultado de este acontecimiento las libertades civiles fueron severamente restringidas, al mismo tiempo que el régimen afirmaba la necesidad de mantener a muchos sectores del país en estado de emergencia, y a su vez, del uso de la justicia militar para los casos de terrorismo. Seguidamente se enfoca la creciente oposición que existía después de 1997, provocada por las tácticas autoritarias fujimoristas, y en particular por la tentativa anticonstitucional para la re-reelección en el año 2000. Durante este periodo, el régimen continuó jugando a la política con el terror con el objetivo de desacreditar a las fuerzas de la oposición y perpetuarse en el poder. Esto lo hizo insistiendo en que el terrorismo era una amenaza latente, además de vincular las protestas sociales legítimas —como las manifestaciones realizadas por la oposición— con las actividades ilícitas de las organizaciones terroristas.

El artículo finaliza con un breve análisis de las consecuencias que tuvo esta manipulación del gobierno de la amenaza terrorista, contra la democracia, los derechos humanos y la sociedad civil en el Perú.

El poder discursivo de la victoria: el triunfo contra la subversión

jo-marie burt

Sin duda, el 12 de septiembre de 1992, día de la captura del líder e ideólogo de Sendero Luminoso, Abimael Guzmán, marcó un hito para el gobierno de Fujimori. El dirigente senderista, que había podido escapar del gobierno por más de una década, y que por ello parecía invencible, ahora se encontraba encarcelado. El arresto de Guzmán proveyó al régimen de un capital político crucial, pues los peruanos creían que dicha captura significaba el final de la violencia política y el regreso a la normalidad de la vida cotidiana. Asimismo, ayudó a restaurar la legitimidad del Estado, crucial para el proyecto a largo plazo del régimen, cual era asegurar el poder del Estado sobre la sociedad (Mauceri 1996, Burt 2004: 247-268).

Un análisis foucaultiano del discurso sugiere que las formaciones discursivas no reflejan simplemente las relaciones de poder: fundamentalmente constituyen relaciones de dominación, poder y control (Foucault 1970, 1980). Mediante las formaciones discursivas, las élites imponen el poder del Estado y el control sobre los grupos sociales, y dichas relaciones de dominación son reforzadas por prácticas políticas y sociales que reafirman las demandas insertas en el discurso de la élite. Partiendo de dichas premisas, este análisis del discurso utilizado tras la captura de Guzmán ilustra la forma en que el régimen fujimorista constituyó el poder en el Perú al adscribir la victoria a las Fuerzas Armadas peruanas, así como culpó a los grupos subversivos por todas las víctimas del conflicto interno. Además, reafirmó la eficacia de las prácticas autoritarias para luchar contra la insurgencia. La captura de Guzmán y el supuesto «triunfo sobre la subversión» fueron trascendentales para la construcción de una narrativa oficial e histórica acerca del conflicto interno peruano, donde las Fuerzas Armadas fueron representadas como defensoras de la legalidad y el honor, mientras que adscribían plena responsabilidad por la violencia a Sendero y el MRTA.⁶

En esta historia oficial, Sendero Luminoso y el MRTA fueron responsables de cada una de las muertes que ocurrieron a lo largo del conflicto.⁷ Las violaciones a los derechos humanos cometidas por las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, que constituyen entre un tercio y la mitad del número total de víctimas políticamente motivadas, han sido suprimidas de esta narrativa oficial.⁸ Cualquier

⁶ Esta sección se relaciona con el texto de Burt (1998: 35-41). Véase también Degregori (2000) y la CVR (2003), para una discusión del esfuerzo del régimen en crear una «memoria salvadora», para imponer su versión oficial de sucesos, eliminar rivales y retener el poder.

⁷ Acerca del número de víctimas en el conflicto interno peruano, véase la nota 5.

⁸ Durante la década de 1990, los grupos de derechos humanos calcularon que las fuerzas de seguridad del Estado fueron responsables de la mitad del total de víctimas políticamente motivadas. Entrevista realizada por la autora a Susana Villarán, ex presidenta de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, 23 de junio de 1998. Véase también el informe anual de la Coordinadora acerca de la situación de los derechos humanos en el Perú (varios años). El *Informe Final* de la CVR (2003) muestra un porcentaje menor, de aproximadamente el 33%, del total de muertes atribuidas a las fuerzas de seguridad del Estado, mientras atribuye a Sendero Luminoso el 54% y al MRTA el 1,5%. Esta aproximación está basada en el universo de testimonios recibidos por la CVR durante los dos años de investigación.

acto cometido por los militares que haya atentado contra los derechos humanos era catalogado como un acto de autodefensa contra la «escoria terrorista». Esta noción —que las Fuerzas Armadas no podían tener responsabilidad alguna por los crímenes que pudieron haber cometido en la guerra contra el terrorismo— fue adoptada hasta la exageración en 1995, cuando una mayoría oficialista aprobó una amnistía en el Congreso, que no solo garantizaba impunidad a los miembros de la policía y las Fuerzas Armadas que habían cometido violaciones a los derechos humanos entre 1980 y 1995, sino que también liberaron a aquellos que ya habían sido condenados por dichos crímenes. «La lógica militar», según Susana Villarán, ex secretaria ejecutiva de la Coordinadora Nacional de los Derechos Humanos en los años noventa, «consiste en que las Fuerzas Armadas vencieron al enemigo y ahora la población debe estar agradecida».⁹

De esta manera la superioridad moral de las Fuerzas Armadas fue construida discursivamente, y cualquier crítica a los militares era considerada equivalente a traición a la patria. Así se estableció una mentalidad maniquea, «con nosotros o contra nosotros», que se oponía a la reconciliación nacional o a la restauración de las libertades democráticas en el Perú. Quizá sea difícil imaginar un diálogo con una agrupación como Sendero Luminoso, que en cada documento publicado hizo explícito su rechazo a cualquier posibilidad de negociación con el «Estado burocrático y capitalista». Sin embargo, al rechazar categóricamente la posibilidad de finalizar el conflicto a través de un proceso de reconciliación, lo que el gobierno fujimorista hizo fue priorizar el conflicto y la polarización. Así, el régimen creó un imperativo categórico que hizo virtualmente imposible considerar cualquier acercamiento de negociación; puesto que en esa lógica, para derrotar el terrorismo y finalizar el conflicto, debía hacerse en un sentido estrictamente militar. La victoria se decidía en el campo de batalla; las negociaciones (o las concesiones que estaban inherentemente implicadas) eran percibidas como peligrosas, e incluso como traición a la patria. Esto reflejaba la ausencia de voluntad del régimen para reconocer el trauma colectivo que había padecido la nación peruana desde inicios de la década de 1980, en la que tanto el Estado como los grupos insurgentes, particularmente Sendero Luminoso, fueron corresponsables. No obstante, en el discurso oficial Fujimori y los militares fueron presentados como los salvadores de la patria en tanto que Sendero y el MRTA, como los villanos; de esta manera cualquier tipo de negociación fue descartada de entrada. Con los insurgentes discursivamente excluidos de la nación, cualquier esfuerzo con el objetivo de establecer los cimientos para una coexistencia colectiva fue denegado. La lógica polarizante, que definió al Perú durante las décadas de 1980 e inicios de 1990, fue reforzada en lugar de ser desmantelada, con la finalidad de instaurar una paz duradera. En efecto, el régimen perpetuó esta polarización con la intención de justificar su política de mano dura, sus ansias para deshacerse de los controles democráticos, la democracia y aferrarse indefinidamente en el poder.

Un aspecto importante para el discurso oficialista fue afirmar que la captura de Guzmán fue consecuencia directa del autogolpe y la concentración de poder que acarrearía Fujimori. Meses después de la captura de Guzmán, Fujimori declaró: «Hubiera sido irresponsable no consumir el autogolpe (dado que) nos permitió continuar exitosamente la batalla contra el terrorismo, la lucha contra la corrupción dentro del Poder Judicial, así como profundizar

⁹ Entrevista realizada por la autora a Susana Villarán, Lima, 23 de junio de 1998.

las reformas económicas». ¹⁰ Esta misma idea iba a repetirse con frecuencia. Por ejemplo, luego de la reelección de 1995, Fujimori continuó cultivando la imagen de ser un líder insustituible que hacía uso de prácticas autoritarias por una necesidad histórica: «Lo que el Perú necesita es orden, disciplina, el principio de autoridad, buen manejo y una mano dura contra el terrorismo». ¹¹ Fujimori contrasta sus éxitos políticos con los fracasos pasados de los políticos tradicionales, y frecuentemente se refiere al sistema político que él heredó como una «partidocracia», para sugerir que los partidos políticos tradicionales gobernaban para su propio beneficio personal más que para los intereses de sus electores. «Mi gobierno es producto del rechazo, de la fatiga del Perú por la frivolidad, la corrupción y la ineficiencia de la clase política tradicional... El pueblo que votó por mí está agotado y harto de este falso Perú». ¹² De esta manera, la eficacia de los métodos autoritarios del régimen fueron construidos discursivamente, primero en contraste con la ineficacia de los políticos civiles; segundo, afirmando que dichos métodos fueron exitosos, evidenciado con la captura de Guzmán y la posterior disminución de la violencia política. De este modo, estas formaciones discursivas ayudaron a constituir el apoyo popular por Fujimori y sus métodos autoritarios. ¹³

Pero la captura de Guzmán tuvo poco que ver con la centralización del poder y la represión política asociada con el autogolpe. La «captura del siglo» fue el resultado de años de un exhaustivo trabajo de inteligencia, hecho por la Dirección Nacional contra el Terrorismo (DINCOTE), una unidad especial de la policía al mando del general Antonio Ketín Vidal. No hubo disparos durante la captura. En poco tiempo, varios miembros de la cúpula senderista fueron arrestados, sumado al desmantelamiento de una serie de estructuras organizativas, como fue el caso de Socorro Popular, que operaba en Lima. ¹⁴ Además, la captura de Guzmán fue muy ajena a la centralización del poder en manos del Poder Ejecutivo, o el cheque en blanco que le fue otorgado a las Fuerzas Armadas para proseguir la guerra contrainsurgente después del autogolpe del 5 de abril. En cambio, fue el clásico trabajo detectivesco, realizado estrictamente dentro de procedimientos democráticos. ¹⁵

¹⁰ Citado por importantes periódicos limeños. Base de Datos DESCO, 31 de marzo de 1993.

¹¹ *The San Francisco Chronicle*, 11 de abril de 1995. (Traducido del inglés.)

¹² *The Dallas Morning News*, 28 de noviembre de 1993, p. B5. (Traducido del inglés.)

¹³ Los éxitos de Fujimori se explican por los éxitos del régimen político (Carrión 1998, Tuesta Soldevilla, ed., 1998), así como el trueque de bienes materiales por votos electorales (Roberts 1995: 82-116). Estas variables significantes no reflejan las maneras en que el poder del Estado y el discurso oficial podían constituir—o en palabras de Chomsky y Herman: manufacturar—consentimiento. Véase Chomsky y Herman 1988. Cómo los discursos ayudaron a constituir consentimiento en el Perú de Fujimori se muestra en Burt 2006: 32-62.

¹⁴ Solo seis cabecillas de Sendero Luminoso fueron arrestados antes de la captura de Guzmán en setiembre de 1992. Tres líderes: Elena Iparraguirre, Laura Zambraño Padilla y María Pantoja fueron arrestadas con Guzmán en la noche del 12 de setiembre. Catorce cabecillas de Sendero Luminoso han sido capturados desde mayo de 1998. *Reporte Especial*, 85, mayo 1998, p. 10.

¹⁵ No se puede decir lo mismo de los procesos judiciales, que fueron llevados a cabo de forma secreta por jueces sin rostro, pues violaron los básicos procedimientos

Pero resaltar el trabajo hecho por la DINCOTE no hubiera sido provechoso para el proyecto a largo plazo del gobierno fujimorista, que era justificar el autogolpe y las medidas autoritarias del régimen. Para este objetivo se desencadenó una lucha política sobre la autoría de la «captura del siglo». Así, se minimizó el rol que tuvo Ketín Vidal; mientras que Fujimori y su asesor, Vladimiro Montesinos, reclamaron crédito por la autoría.¹⁶ Según se tiene entendido, Montesinos estuvo furioso porque Ketín Vidal se negó a entregar a Guzmán al Servicio de Inteligencia Nacional (SIN). A partir de entonces la DINCOTE fue desmantelada y Ketín Vidal fue promovido a un puesto de absoluta irrelevancia. En su esfuerzo para erigirse como los autores intelectuales de la captura de Guzmán, Fujimori y Montesinos eliminaron efectivamente uno de los instrumentos más efectivos contra la subversión.

Esto provocó un sorprendente viraje en los eventos venideros, pues no hay duda de que dichos instrumentos fueron centrales para que al Estado peruano obtuviese finalmente la ventaja estratégica en la guerra contrainsurgente. Durante los años ochenta, los gobiernos democráticos habían entregado el manejo de la guerra contrasubversiva a las Fuerzas Armadas. El resultado de las campañas militares fue desastroso, puesto que los civiles eran objeto de abusos y masacres, desapariciones forzadas, tortura y otras violaciones a los derechos humanos; así como las frecuentes pugnas entre los líderes militares y civiles, particularmente, cuando las masacres o las violaciones a los derechos humanos se volvían públicas.¹⁷ Tanto el Human Rights Watch como la Comisión de la Verdad y la Reconciliación (CVR) hacen referencia a esta práctica como la «abdicación de la responsabilidad democrática» por parte de las élites civiles (Human Rights Watch 1984, CVR 2003). El fracaso de esta política estuvo determinado por el número de víctimas mortales, la expansión de la actividad senderista a lo largo del país y la creciente brecha que separaba a los ciudadanos del Estado, marcado por un deterioro de las instituciones. Ello provocó que el Estado perdiera control efectivo sobre regiones importantes del territorio nacional. Estos fracasos incitaron a que sectores estratégicos dentro de las Fuerzas Armadas reevaluaran la política de la contrainsurgencia a fines de la década. De forma significativa, en los últimos años del gobierno de Alan García (1985-1990), se comenzó a priorizar el trabajo de recolección de inteligencia como para enfrentar a los grupos insurgentes. Dado que Sendero era fundamentalmente una organización jerárquica que giraba en torno al carisma y a la visión de Guzmán, entonces derribando a la figura de mando se podía, en efecto, neutralizar al grupo insurgente —una estrategia altamente apropiada, como sucedió luego de la captura de Guzmán. Además, para rediseñar la política contrainsurgente, fue clave que hubiera un mayor esfuerzo por parte del Estado en captar apoyo del campesinado; primero, para reducir la violencia indiscriminada (aunque es importante notar de que

legales. En 2004, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos aprobó una resolución exhortando al Perú para que vuelva a hacer juicios más justos.

¹⁶ Fujimori no estaba enterado del inminente operativo contra el líder de Sendero Luminoso —él se encontraba pescando en el río Amazonas cuando se enteró de que Guzmán había sido arrestado—. Sí, Lima, 14 de setiembre de 1992.

¹⁷ En el primer año del gobierno de Alan García (1985-1990), hubo un intento de que los civiles tuvieran control sobre los militares, y castigasen cualquier violación a los derechos humanos. Esto fue rechazado por los militares y eventualmente el régimen de García dejó de lado esta propuesta por la aparición de otras crisis (Human Rights Watch 1984; CVR 2003).

los «asesinatos selectivos» y las desapariciones forzadas de parte de las Fuerzas Armadas continuaron); segundo, al tratar de construir alianzas con los campesinos y con los sectores populares en las barriadas de Lima para así «ganar los corazones y las mentes» de la población civil por medio de patrullas de defensa civil (rondas campesinas), programas de acción cívica, y otras iniciativas de desarrollo. Estos cambios efectivamente contribuyeron a aislar a Sendero de importantes sectores del campesinado rural, muchos de los cuales se aliaron con los militares para protegerse de la creciente violencia de Sendero (véase Degregori 1999a). Fueron estos cambios de la política contrainsurgente, los que provocaron el consecuente aislamiento de Sendero en el campo y la captura de Guzmán, más que la centralización de poder luego del autogolpe.¹⁸

Luego de la captura de Guzmán el gobierno no continuó con el efectivo trabajo detectivesco y de recolección de inteligencia como elemento clave para la política contrainsurgente, lo cual pudo haber desmantelado a dichos grupos subversivos de forma definitiva. En cambio, Fujimori y sus aliados afirmaron discursivamente que la captura de Guzmán demostraba la eficacia del régimen: la centralización del poder; las tácticas de mano dura; y Fujimori como el líder indispensable, eran las claves de la derrota de Sendero y la seguridad de la estabilidad hacia el futuro. El autoritarismo entonces se convierte en el eje central de una formación discursiva que afirma una relación causal entre las prácticas represivas y autoritarias del gobierno, por un lado, y los éxitos en la política contrainsurgente por otro. La construcción discursiva de la eficacia del autogolpe de abril de 1992 fue crucial para consolidar un proyecto autoritario del fujimorismo a largo plazo, la instauración de un gobierno cívico-militar.¹⁹ El autogolpe permitió que el régimen pudiera, sin mucha dificultad, impulsar reformas neoliberales, incluido un rápido programa de privatización; a su vez buscó legitimar un rol preponderante de lo militar en la política, incluyendo la expansión del control militar sobre la sociedad peruana. Incluso aun cuando los movimientos subversivos se encontraban duramente golpeados y la violencia política se había reducido drásticamente, el gobierno buscó la manera de justificar la continuación de varias medidas anti-democráticas. Por ejemplo, el gobierno justificó la necesidad de conservar la legislación antiterrorista, a pesar de haber sido duramente criticada desde muchos sectores por ser altamente draconiana, y por ocasionar la detención y encarcelación de miles de inocentes por juicios que no respetaban el debido proceso (De la Jara 2001). A su vez, el gobierno justificó que se mantuviera a dos tercios del país y la mitad de la población bajo estado de emergencia. Esto privaba a los ciudadanos sus plenos derechos tanto políticos como civiles, y a menudo otorgaba autoridad política a los militares (CVR 2003). En suma, las medidas impuestas provocaron una

¹⁸ Para un análisis previo de estos cambios, véase Degregori y Rivera 1993. *El Informe Final* de la CVR proveyó de un extenso análisis de los cambios en la política contrainsurgente, desde 1980 hasta 2000 (CVR 2003).

¹⁹ A pesar de que el régimen fujimorista estuvo forzado a permitir la formación de un nuevo cuerpo legislativo en 1992, en el que se creó una nueva Constitución que de ninguna manera marcó el regreso del Perú al ámbito democrático, como algunos hacedores de política internacionales y catedráticos sugieren. El nuevo Congreso permitió a Fujimori establecer una careta democrática, controlada fundamentalmente por ese sistema autoritario que se había convertido el Poder Ejecutivo en colaboración con las Fuerzas Armadas. (Véase Rospigliosi 1996; Burt 1998, CVR 2003).

atmósfera de temor e intimidación que inhibió cualquier signo de protesta por parte de la oposición organizada (Burt 2006).

Así, en lugar de finalizar el conflicto interno, el régimen fujimorista procuró politizar sus éxitos para de esta manera garantizar su permanencia en el poder. Sobre la base de estos resultados en la guerra contrasubversiva, como la captura de Guzmán y otros altos líderes de la organización maoísta, el gobierno fujimorista pudo haber priorizado eliminar cualquier vestigio de Sendero mediante acciones militares específicas o por medio de una política más amplia de reconciliación nacional. De hecho, al no derrotar completamente a Sendero, el régimen continuó utilizando la figura de este —por acciones armadas ocasionales vistas como «rebotes» de la «amenaza terrorista»— para justificar las prácticas autoritarias y su permanencia en el poder.

Las conversaciones de paz: ¿pacificación o propaganda?

Un año después de la captura de Guzmán el gobierno sacó al aire una serie de videos que mostraban a un Guzmán supuestamente arrepentido, pidiendo al gobierno a que se comprometiera a fijar conversaciones de paz, al mismo tiempo que criticaba a los líderes prófugos de Sendero Luminoso de continuar en la guerra de guerrillas. Esto pareció un giro abrupto e inverosímil, sobre todo porque se trataba de aquel hombre que, dos semanas después de su captura, en conferencia de prensa declaró desafiantemente que su arresto no era más que «una piedra en el camino» hacia la victoria inevitable de su revolución. Varios observadores pusieron en duda la sinceridad del llamado de paz de Guzmán. Muchos se preguntaron qué sentido tendría su petición, ya que él estaba en prisión y su movimiento prácticamente derrotado. Poco después apareció una segunda carta de Guzmán, y luego otra escrita por varios miembros de la cúpula senderista en que declaraban su apoyo a la petición de conversaciones de paz. ¿Cuál era la verdadera lógica detrás de dichas cartas? ¿Por qué el gobierno permitió que esos videos fuesen difundidos por la televisión nacional? ¿Por qué el gobierno, inmediatamente después, rechazó la oferta hecha por Guzmán? ¿Cómo se puede explicar que Guzmán haya capitulado, un año después de haber ordenado a su organización continuar con la lucha armada?

Se hizo evidente que todo esto era una campaña de propaganda, finamente orquestada, en la coyuntura del referéndum para una nueva Constitución hecha a la medida de Fujimori por sus aliados en el Congreso. Dado que existía una presión externa ante el autogolpe del 5 de abril, Fujimori estaba presionado para retrotraerse de su proyecto autoritario: pero esto lo hizo a su manera. La cámara legislativa fue restaurada, pero ahora era un Congreso unicameral, donde existía un mayor control por parte del Poder Ejecutivo. De hecho, el partido de Fujimori, Cambio 90-Nueva Mayoría, dominaba fácilmente esa nueva institución, que había convertido al Congreso, según muchos críticos, en una sucursal para el régimen.²⁰ Este nuevo cuerpo legislativo tuvo la tarea de redactar la nueva Constitución. Para asegurar la aprobación de la nueva carta magna —que, a

²⁰ Varios partidos de la oposición, incluido el APRA, Acción Popular, y algunos partidos de izquierda, se negaron a presentar candidatos para las elecciones legislativas, como una forma de protesta, porque con esta acción —creando un cuerpo

diferencia de la de 1979 permitiría la reelección sucesiva— el régimen difundió las cartas escritas de Guzmán y los otros dirigentes senderistas. Al publicitar la propuesta de Guzmán y luego rechazarla de manera tajante, fundamentando que era política del Estado «no negociar» con los terroristas, el oficialismo pudo insistir en los éxitos de su política contra el terror, reafirmar la eficacia de sus políticas de mano dura y apropiarse de los votos del electorado.

Dos cartas, del puño y letra de Guzmán, fueron dirigidas a Fujimori en septiembre y octubre de 1993. En dichas cartas Guzmán reconoció a Fujimori como Jefe del Estado peruano. Por otro lado admitió que el gobierno de Fujimori había reconstruido exitosamente el Estado peruano; y reconoció que su captura, para los fines de la organización maoísta que lideraba, había terminado siendo mucho más que solo «una piedra en el camino» para el triunfo de su revolución.²¹ Solicitaba además la realización de conversaciones de paz para terminar la guerra. A partir de entonces, cuatro de los principales líderes de Sendero Luminoso, incluyendo a Osmán Morote, escribieron (desde la prisión) otra carta a Fujimori, apoyando la petición de Guzmán.²² Aunque ninguna carta haya mencionado un cese al fuego, esta última exhortó a los seguidores de Guzmán a que eviten «acciones desesperadas, aventureras... que pudieran socavar y poner en peligro la implementación del acuerdo de paz propuesto», y que dichas acciones «deberían ser prevenidas y denunciadas de manera firme e inmediata».²³

La redacción de las cartas, particularmente la firmada por Morote y otros dirigentes senderistas, solo pudo ocurrir con ayuda logística del régimen fujimorista. Todos los firmantes de las cartas de la cúpula senderista estaban en prisión, pero algunos —como Guzmán y su pareja, Elena Iparraguirre— estaban recluidos en la Base Naval del Callao, en tanto que otros como Morote se encontraban en la prisión de alta seguridad de Yanamayo, situada en el remoto altiplano puneño. Se puede deducir entonces que el régimen fujimorista instigó a Guzmán a que propusiese conversaciones de paz. Esto pudo haber sido concebido como una manera de dismantelar los remanentes de Sendero y terminar de una vez con los años de violencia. No obstante, la respuesta pública de Fujimori en relación con las cartas fue rechazar de primer plano la petición de Guzmán. En respuesta,

legislativo dócil— se estaba legitimando el autgolpe y reorganizando el poder bajo el dominio de Fujimori.

²¹ La primera carta, fechada el 15 de setiembre de 1993, fue escrita por Abimael Guzmán y la segunda en mando, Elena Iparraguirre, desde la Base Naval del Callao. Está dirigida al «Señor Alberto Fujimori Fujimori, Presidente de la República». La segunda carta, fechada el 6 de octubre de 1993, firmada de nuevo por Guzmán e Iparraguirre, es más extensa y exhorta argumentos a los líderes senderistas para que acepten el acuerdo de paz. Sin embargo no fue revelada públicamente hasta fines de octubre, para coincidir con el 31 de dicho mes, día del referéndum de la nueva Constitución.

²² Según se informa, Vladimiro Montesinos, jefe de facto del Servicio Nacional de Inteligencia, habría facilitado comunicación a la cúpula senderista dentro de la prisión. Algunos miembros, como el caso de Osmán Morote, fueron trasladados desde Puno para participar en las discusiones con otros líderes de Sendero y presentar esta carta en un video que salió al aire en la televisión.

²³ «En nueva carta, cúpula senderista pide detener los atentados», *Expreso*, 30 de octubre de 1993, pp. 1-2; «Sendero llama a militantes a no caer en acciones desesperadas y provocadores», *La República*, 30 de octubre de 1993, pp. 1-3.

Fujimori declaró: «[Mi administración] no es un gobierno de compromiso. He declarado una guerra absoluta a Sendero Luminoso y al MRTA».²⁴

Inmediatamente, dirigentes de la oposición acusaron al régimen de utilizar las cartas de Guzmán como soporte político para respaldar su Constitución. La segunda carta de Guzmán y la «carta de respaldo» fueron puestas a la luz pública días antes del 31 de octubre, día del referéndum por la nueva Constitución. Ganar el referéndum no era de todo seguro para el régimen: había una oposición importante a la propuesta no solo por la propuesta de reelección, sino también por rechazo a ciertas propuestas específicas, como la rehabilitación de la pena de muerte, que desató la crítica de parte de la Iglesia Católica y las organizaciones de derechos humanos. La constitución propuesta también eliminaba varias protecciones sociales garantizadas en la anterior Constitución, como la estabilidad laboral. Más aún, aunque los aliados de Fujimori habían obtenido una mayoría parlamentaria en el nuevo Congreso (llamado Congreso Constituyente Democrático, o CCD), establecido en noviembre de 1992, el oficialismo sufrió una derrota importante en las elecciones municipales de enero de 1993. Esto provocó preocupación dentro del régimen por el resultado del referéndum.

De hecho, las encuestas ilustran que los electores se inclinaron a votar a favor del referéndum después de que las cartas de Guzmán fueran conocidas por la opinión pública, seguida por la severa advertencia de Fujimori: «(Yo), como Presidente de la República, estoy mandando este mensaje (a Guzmán) que no habrá ningún tipo de negociación y que él debe conminar a sus seguidores a rendirse».²⁵ Según la encuesta tomada inmediatamente después de que uno de los videos fuera mostrado, el 10 de octubre, el 59% de los encuestados dijo que tenían intención de voto a favor de la Constitución, mientras que solo un 31% dijo que votaría en contra. Esto representó un incremento de diez puntos porcentuales a favor en relación con una encuesta tomada dos semanas antes.²⁶ Resucitar la figura de Fujimori como el hombre que derrotó al terrorismo le sirvió para ganar más votos. Con respecto a las cartas de Guzmán, que alababa los «éxitos objetivos» del plan contrainsurgente fujimorista, el congresista Julio Castro, de Izquierda Democrática, declaró que: «Guzmán parece haberse convertido en uno de los promotores más importantes en la campañas del referéndum para el Sí».²⁷ Al final la Constitución, hecha a la medida por el oficialismo, fue aprobada apenas por un estrecho margen.²⁸

Es evidente que hubo una dimensión estratégica para que las cartas y los videos fueran expuestos ante la opinión pública. Esta consistió en provocar una división en Sendero Luminoso e incentivar deserciones masivas en dicha agrupación subversiva. Estrategas del gobierno creían que la «capitulación» de Guzmán no solo lo desacreditaría frente a sus seguidores, sino que también generaría divisiones irreconciliables dentro de esta organización. Estas divisiones, en cambio, tendrían un efecto desmoralizador sobre los militantes senderistas y

²⁴ Citado en Andrew Batel, «Peru's President Rejects Surprise Rebel Peace Offer». *The Associated Press*, 1 de octubre de 1993. Traducido del inglés.

²⁵ Agence France Presse, 11 de octubre de 1993.

²⁶ *Latin America Weekly Report*, WR-93-42, 28 de octubre de 1993, p. 495.

²⁷ United Press International, 12 de octubre de 1993.

²⁸ El voto a favor equivalía al 52,3% frente al 47,7% que votó en contra, un 9% votó blanco o nulo (Tuesta 1994: 129).

los alentarían a abandonar la lucha armada. Debido al intenso culto a la personalidad en Sendero Luminoso, que giraba en torno a la figura de Guzmán, los estrategas del gobierno concluyeron que asestar ese golpe sería clave para cumplir la promesa fujimorista de liquidar a Sendero para 1995. Esta estrategia parecía funcionar cuando la cúpula que permanecía en el poder —liderada por Óscar Ramírez Durand, alias «camarada Feliciano», el tercer cabecilla de importancia en la organización cuando Guzmán fue capturado, y líder del Ejército Guerrillero Popular— se negó a aceptar las cartas como válidas, catalogándolas de «una patraña siniestra» montada por el gobierno y el SIN.²⁹ Ramírez Durand, quien había reorganizado el Comité Central después del arresto de Guzmán, siguió obedeciendo las directivas de este desde la prisión, aquellas que exhortaban a continuar la guerra popular. Él juró seguir haciéndolo.³⁰

Guzmán no estaba simplemente cediendo ante las demandas del gobierno para poder recibir privilegios en prisión —como muchos analistas sugerían en el momento— aunque sí los recibió, incluyendo visitas conyugales de su amante y segunda en la cadena de mando, Elena Iparraguirre. Un documento escrito a mano por Guzmán esclarece este episodio.³¹ El documento revela que la intención de Guzmán no era terminar la guerra de forma pacífica e integrar Sendero Luminoso al sistema político peruano —como sucedió con M-19 en Colombia o el FLMN en El Salvador—. En este documento, Guzmán no renuncia a la lucha armada; más bien, él declara, parafraseando a Mao: «La guerra es la forma más elevada de la lucha de clases», y luego afirma que el comunismo es el único destino de la humanidad. «Es inexorable, la principal tendencia de la revolución», pero en lugar de hablar de años, él habla de décadas. De acuerdo con Guzmán, la «ofensiva ideológica y política del imperialismo» —reestructuración capitalista y la aplicación de políticas económicas neoliberales en todo el mundo— es «transitoria»; y que en el 2000, el imperialismo se encontrará en una «lenta agonía». Él arguye que la tarea para todos los revolucionarios es de «luchar por la gran ola futura de la revolución mundial» que emergerá entre 2010 y 2060.

Las conversaciones de paz también estuvieron basadas en la convicción de Guzmán de que el factor determinante en cualquier movimiento revolucionario es el liderazgo. Reflejando su creencia en el principio leninista del partido de vanguardia, Guzmán reconoce que su captura y la de los principales dirigentes senderistas es un golpe estratégico contra su organización. Estando encarcelado, Guzmán ya no podía dirigir la revolución; por lo tanto no había posibilidad alguna en desarrollar la guerra popular, solo en «mantenerla». Estos hechos objetivos provocaron que el liderazgo del partido adoptara «una nueva y gran

²⁹ Véase, por ejemplo, «El Silencio de los corderos», y «Pronunciamiento: ¡Unir al pueblo en defensa de la jefatura, contra la dictadura genocida vende patria!», *El Diario Internacional* 23 de abril de 1994, pp. 2-3 y 14-16, respectivamente. Véase también «Abajo la patraña contrarrevolucionaria. Gloria a los héroes del pueblo», del Comité de Familiares de Presos Políticos Prisioneros de Guerra y Desaparecidos del Perú, febrero de 1994.

³⁰ «Feliciano acuerda seguir 'guerra popular'», *La República*, 28 de abril 1994, pp. 19-21.

³¹ «Asumir y Combatir por la Nueva Gran Decisión y Definición», octubre de 1993. Reproducido parcialmente en *La República*, 23 de enero de 1994. La autora tuvo acceso total al documento escrito a mano.

decisión» en busca de un acuerdo de paz.³² Guzmán criticó duramente a Feliciano por no acatar su nuevo mandato: «El liderazgo afuera (de las prisiones) no analiza los nuevos problemas, la nueva dirección». A pesar de que Guzmán mantuvo la idea según la cual «La guerra es política con derramamiento de sangre», argumentó que en estas nuevas condiciones, era el momento para la «política (que) es guerra sin derramamiento de sangre».³³

Guzmán estaba jugando su propia partida de ajedrez al tratar de tomar ventaja de las oportunidades dadas por el gobierno. Dirigir un metódico repliegue de las fuerzas senderistas, para que puedan estar mejor preparados para reagruparse en el futuro, cuando las condiciones sean más favorables.³⁴ En retrospectiva, pareciera que Guzmán hubiera cumplido parcialmente sus objetivos. Luego de cruentas divisiones dentro de la organización maoísta, a partir del llamado de Guzmán por un acuerdo de paz, hoy en día gran parte de los militantes se mantienen fiel a Guzmán y su llamado a dedicarse a la «política sin derramamiento de sangre». Por otro lado, mientras que los dirigentes claves continúan presos, hay signos de que Sendero Luminoso se está recomponiendo en algunas partes del país y que está dedicado a un lento trabajo político, que al igual que en los años setenta antes de lanzar su guerra popular, busca cultivar apoyo en los segmentos descontentos de la población. Entrevistas con líderes de Sendero Luminoso en la prisión de mujeres de Chorrillos, en el 2002, confirman el compromiso de la organización con una lucha política de larga duración.³⁵

Para el régimen fujimorista jugar a la política con el terror trajo réditos a corto plazo, tanto en términos de respaldar los programas de los candidatos durante épocas de elecciones, como en mantener el apoyo popular, o por lo menos cierta indiferencia con las prácticas autoritarias del régimen. Sin embargo, jugar a la política con el terror acarrea dos graves fallas. Primero, al remarcar de manera enfática el triunfo de las Fuerzas Armadas sobre Sendero, el régimen creó como imperativo categórico la victoria militar del conflicto, más que cualquier tipo de solución política o negociada. Esto implicaba que la estrategia contrainsurgente se enfocara exclusivamente en un ámbito militar, mientras que era casi imposible interpelar a la insurgencia desde una dimensión política. Por

³² «Asumir y Combatir por la Nueva Gran Decisión y Definición», octubre de 1993. Reproducido parcialmente en *La República*, 23 de enero de 1994.

³³ En otros documentos aparentemente escritos por Guzmán, en que busca explicar su nueva línea política a sus camaradas de prisión, el ideólogo senderista elaboró los fundamentos de su razonamiento. Él arguye que el Estado ha logrado vencer tres desafíos esenciales para su reconstitución: 1) establecer una base económica para el Estado capitalista y burocrático; 2) reestructurar el Estado con la Constitución de 1993; y 3) una victoria militar sobre Sendero Luminoso, por ejemplo con la captura de sus principales líderes. Estos documentos incluyen: «Luchar por un Acuerdo de Paz y Sentar Bases para el II Congreso», noviembre de 1993 y «Unirse más brevemente decididamente en luchar por un Acuerdo de Paz y sentar bases, defender y combatir», octubre de 1994.

³⁴ El gobierno no publicó la tercera carta en la que Guzmán condicionó su participación en conversaciones de paz y a declarar un cese de fuego a que el gobierno hiciera lo mismo. Para un análisis más profundo en los cambios de estrategia de Sendero durante este periodo, véase Burt y López Ricci 1994: 6-10, y Rojas Pérez 1995: 98-105.

³⁵ Las entrevistas tuvieron lugar en diciembre de 2002, mientras realizaba una investigación para la Comisión de la Verdad y la Reconciliación.

lo tanto, la única manera de poner término a la violencia política era por medio de la destrucción militar de Sendero Luminoso. Cuando el gobierno se negó categóricamente a negociar con Sendero Luminoso —una estrategia del régimen para ganar adhesión política para su proyecto político autoritario— se cerró cualquier posibilidad de buscar soluciones políticas para terminar el conflicto interno. Además, no dejó ningún espacio para que se llevaran a cabo políticas que incorporasen ex guerrilleros a la vida social, y que de esta manera se pudiera asegurar que los arrepentidos no volvieran a adherirse a una fuerza guerrillera u organización criminal. El resultado era la continuación de la violencia política, tanto por el Estado —en su esfuerzo por eliminar completamente todo vestigio de los movimientos insurgentes— como por parte de los insurgentes, para quienes no quedaba otra salida que seguir luchando. En esta tierra de nadie de guerra eterna, el régimen fujimorista se dedicaba a reproducir su discurso triunfalista con el objetivo de perpetuarse a sí mismo en el poder.

Esto conlleva a la segunda falla: la derrota absoluta de la insurgencia no parece haber sido la prioridad del régimen fujimorista, pues la amenaza latente de un supuesto rebrote de Sendero podía servir como pretexto para justificar por tiempo indefinido las medidas autoritarias —la legislación antiterrorista; el control militar sobre más de dos tercios del territorio nacional, por medio de decretos de estado de emergencia que negaban las libertades tanto civiles como políticas de casi la mitad de la población; la centralización del poder en manos del Poder Ejecutivo y el proceso de desmantelamiento de los aparatos de inspección y revisión democráticos. Todos estos elementos fueron cruciales para mantener desarticulada a la sociedad civil y, de esta forma, el gobierno siguiera manteniendo el poder. En otras palabras, el éxito de la guerra contra-insurgente se subordinó al empeño del régimen de perpetuarse en el poder. Por esta razón, el episodio de las cartas fue concebido para fortalecer la imagen de Fujimori como un líder fuerte que se niega a negociar con terroristas. Así, Fujimori aseguró votos para poder ganar el referéndum, pieza clave de su plan más ambicioso: asegurar la continuación del régimen en el poder. El cálculo político triunfó sobre la seguridad nacional, y tuvo como consecuencia permitir la recomposición de la cúpula senderista y la articulación de una nueva política estratégica que, en la actualidad, estructura las actividades de Sendero (Burt 2005: 32-37). Con este ejemplo se puede comprender mejor la paradoja de la Operación Aries, que exageró la amenaza terrorista para dar la imagen de Fujimori como el «salvador» de la nación; y de esta manera, respaldarlo en su campaña para la reelección de 1995.

Exagerando la amenaza terrorista: Operación Aries y el imperativo de la reelección

El 5 de abril de 1994 —dos años después del autogolpe— las Fuerzas Armadas lanzaron una campaña masiva de ocupación militar y bombardeo aéreo en la margen izquierda del río Huallaga donde, según el gobierno, fracciones senderistas estaban reagrupándose después de la derrota estratégica de dicha organización luego de la captura de Guzmán. Según la Comisión de la Verdad y Reconciliación esa operación masiva representa una paradoja, ya que la influencia de Sendero en esa región no era tan significativa como se presume. Asimismo, era factible que los militares para ese entonces ya habían reestablecido

la autoridad del Estado como parte de la campaña para controlar el territorio nacional y así aislar a Sendero.³⁶ La paradoja se hace evidente si se examina el contexto político en que la operación fue llevada a cabo: elecciones presidenciales programadas para el siguiente año, el régimen anhelando un segundo mandato de Fujimori. Por tanto, se hizo necesario poner de relieve de nuevo la figura del presidente Fujimori como el hombre que salvó a su país de la plaga terrorista.

Fujimori había afirmado varias veces que para 1995 iba a eliminar cualquier vestigio de los dos grupos insurgentes que habían causado estragos en el Perú. Específicamente después de la captura de Guzmán, dichas promesas formaron parte central del discurso del régimen cuando afirmaba su triunfo sobre la subversión. Debido a la negación del régimen a dirigirse políticamente a la insurgencia, facciones pequeñas de la organización senderista permanecieron activas en zonas remotas del país. A un año de las elecciones presidenciales, el régimen decidió lanzar una «ofensiva final» contra estos remanentes: tal operación militar podría asegurar la desaparición absoluta de dicha organización, pero también podría proveer a Fujimori de un capital político significativo para las próximas elecciones. No obstante, la cobertura mediática sobre dicha operación militar reveló hasta qué punto esta era más un intento por revivir la imagen de Fujimori —y las Fuerzas Armadas— como quien había destruido el terrorismo, y no como se representaba: una operación militar enfocada en destruir los últimos vestigios de este.

Por varios años Sendero tuvo presencia en la zona del Huallaga, epicentro del tráfico de drogas, al ofrecer protección a los sembradores de coca. Los protegía de los programas gubernamentales de erradicación, de la policía abusiva y de los narcotraficantes, por medio de la imposición de estrictos códigos de conducta. Sin embargo, la desorganización producida por la captura de Guzmán conllevó a que la presencia del grupo insurgente se debilitara en el Huallaga, a pesar de que ciertas células se mantuvieron activas. Como se ha mencionado líneas arriba, la necesidad del régimen de mantener la imagen de Fujimori como implacable con el terrorismo imposibilitó otras salidas políticas para terminar el conflicto interno. Con las soluciones políticas de pacificación bloqueadas, la única solución era la destrucción militar de los remanentes de Sendero Luminoso. Como boceto tentativo para dicha estrategia Fujimori proclamó públicamente: «No habrá más escondites, pues vamos a sacar a Sendero Luminoso de Mazamari, Satipo, Pucallpa y Atalaya, y acorralar a las guerrillas... Allí, vamos a tener una pequeña guerra de Vietnam».³⁷ Las guerrillas, aseguró Fujimori, serían aplastadas al final de su mandato en 1995.³⁸

A inicios de 1994, Fujimori dio personalmente instrucciones a las Fuerzas Armadas para poner en marcha la «misión final», que se suponía iba a derrotar a Sendero de una vez por todas. Conocida como Operación Aries, la prensa oficialista la retrató como el último impulso que se debía dar en la guerra contra la subversión. La naturaleza contradictoria de la operación militar se tornó evidente en los artículos de prensa que retrataron a Sendero como un grupo desarticulado

³⁶ Este informe acerca de la Operación Aries y sus secuelas proviene de una recolección de testimonios de primera mano por grupos de derechos humanos, como lo ha reportado la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (1994) y la CVR (2003).

³⁷ «Peru chief pledges to wipe out guerrillas». *The Record* (Periódico del *Toronto Star*), 26 de octubre de 1993, p. E14.

³⁸ *The Record*, 26 de octubre de 1993, p. E14.

y sin embargo remarcaban que era prioridad para el gobierno la eliminación de la insurgencia. Existe evidencia de que las Fuerzas Armadas exageraron el tamaño de las facciones senderistas en la zona. Informes de Inteligencia sugieren que los insurgentes tenían entre 100-180 combatientes uniformados, pero el Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas, el general Nicolás Hermoza, alegó que había al menos 450. La prensa oficialista también afirmó que las dos fuerzas en conflicto tenían virtualmente la misma capacidad en términos de armas, municiones y entrenamiento, pero en realidad las Fuerzas Armadas tenían apoyo aéreo y un armamento ampliamente superior (CVR 2003).

Semanas después de que la Operación Aries fuera puesta en marcha, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) —la principal organización de derechos humanos del país— visitó la zona e informó que se habían cometido violaciones sistemáticas a los derechos humanos, perpetradas por los militares; al mismo tiempo cuestionó severamente la eficacia y la necesidad de dicha campaña. La Coordinadora acusó que las campañas de bombardeo aéreo, las tácticas militares de tierra arrasada, la tortura y el secuestro, así como las ejecuciones extrajudiciales que ocurrieron durante dicha operación, representaban una dramática e inexplicable regresión a las estrategias de «guerra sucia» utilizadas a inicios de los años ochenta, en las que los militares no sabían distinguir entre los civiles y los grupos insurgentes. Esto provocó una violencia indiscriminada contra inocentes, masivas violaciones a los derechos humanos, incluyendo la muerte de al menos 36 civiles, entre niños y mujeres (CNDDHH 1994). El diario profujimorista *Expreso* criticó a los grupos de derechos humanos al sugerir que estos protegían a los grupos terroristas (CVR 2003). Las reacciones no tardaron, y el Congreso oficialista aprobó una moción que condenaba a la Coordinadora por difundir «informes negativos acerca de la conducta de las Fuerzas Armadas» (Human Rights Watch 1995).

La Operación Aries no fue una estrategia diseñada para combatir los últimos vestigios de Sendero, sino que sirvió específicamente como propaganda oficialista para reforzar la imagen del presidente en las elecciones venideras. Huelga decir que Fujimori ganó cómodamente la reelección en 1995. Jugar a la política con el terror parece haberle traído importantes réditos, ya que ganó las elecciones; pero tuvo efectos perniciosos sobre la democracia y los derechos humanos, y tampoco ayudó a finalizar a al conflicto interno.

La amenaza que representaban los remanentes de Sendero Luminoso en el Huallaga fue sobredimensionada. Se hizo con la finalidad de justificar la campaña militar que una vez más resaltó la imagen de Fujimori como un líder nato. Sin embargo, las masivas violaciones a los derechos humanos fueron el calamitoso resultado de dicha operación; y cuando las organizaciones de derechos humanos llevaron estas violaciones a la luz pública, fueron acusadas por el régimen de ser desleales y mentirosas. Asimismo, el gobierno contribuyó a crear una atmósfera de miedo e intimidación que erosionó los espacios para el disenso público con respecto a las prácticas y las políticas del régimen. En efecto, a pesar de que la violencia política estaba sustancialmente en descenso a fines de 1994, cerca de la mitad de la población continuaba viviendo en un estado de emergencia en el cual las más importantes garantías constitucionales, tales como: la libertad individual, la libertad de acción, la libertad de asociación y la libertad de expresión permanecían suspendidas (CNDDHH 1994). Por último, la Operación Aries no cumplió con su supuesto objetivo: eliminar los vestigios de Sendero Luminoso. A partir de la exageración de la amenaza terrorista, la

política contrainsurgente estaba siendo utilizada para fines políticos, y para mantener el control militar sobre la sociedad civil.

La crisis de los rehenes de 1996: o cómo el poder se reproduce a sí mismo aun en épocas de crisis

En diciembre de 1996, una columna del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru, MRTA, arremetió contra la residencia del embajador japonés en el Perú. Secuestraron a más de 500 personas, invitados de una lujosa fiesta en la residencia. Los rehenes incluían a la madre del presidente Alberto Fujimori, así como a su hermano Santiago, uno de sus más influyentes asesores. También se encontraba el embajador de los Estados Unidos. Las negociaciones iniciales permitieron que en poco tiempo se diera la liberación de mujeres y ancianos. Sin embargo, 72 rehenes permanecieron dentro de la embajada por cuatro largos meses.

La crisis de los rehenes se dio en un momento complicado para el régimen de Fujimori. Luego de dos años con un sólido crecimiento económico en 1994 y 1995 (que contribuyó a que Fujimori saliera reelegido en 1995), la economía ahora estaba decreciendo y la creación de puestos de trabajo se había estancado. Como resultado la popularidad de Fujimori decayó a mediados de 1996.³⁹ Asimismo, él había declarado que la insurgencia había sido derrotada. Se reconocía que todavía existían algunos remanentes de Sendero Luminoso; pero por otro lado el régimen se jactaba del presunto exterminio del MRTA. Así, la toma de la residencia del embajador por el MRTA reveló una grave falla de seguridad del gobierno. Esto contradujo su discurso triunfalista; de hecho, informes iniciales pusieron al descubierto hasta qué punto la politización de la guerra contrainsurgente había comprometido a la seguridad nacional.

La situación del régimen era complicada, sumada a las dificultades que iba a acarrear el hecho de que Fujimori postulara para un tercer mandato —cuando la Constitución de 1993 permitía la reelección por un solo periodo consecutivo—. En las elecciones municipales de 1993, el candidato oficialista, Jaime Yoshiyama, perdió frente al entonces alcalde de Lima, Ricardo Belmont. El fracaso de Yoshiyama, a quien muchos vieron como el sucesor natural de Fujimori, mostró que los votos de este no eran trasferibles a otro candidato. Por eso era esencial asegurarse un tercer periodo presidencial, para garantizar la continuidad del modelo económico, así como impunidad para los miembros de las Fuerzas Armadas acusados de violaciones a los derechos humanos. Un tercer periodo también era importante porque muchas personas cercanas al régimen estaban lucrando personalmente, la continuidad del régimen les garantizaría la oportunidad de seguir haciéndolo y, a su vez, evitar la justicia. Pese a que la segunda re-elección no estaba permitida constitucionalmente, Fujimori y sus aliados se sintieron seguros de que podían capear el temporal debido al control que ejercía el Ejecutivo tanto sobre el Poder Legislativo como sobre el Poder Judicial. Pero había un problema, ya que los éxitos en su primer periodo —el control de la inflación, la reinserción económica, la derrota estratégica del terrorismo— iban perdiendo importancia para el ciudadano común. Efectivamente, los peruanos comenzaron a preocuparse de

³⁹ El incremento del producto bruto interno fue de 14% en 1994, pero fue solo 6% en 1995 y 2% en 1996.

cosas más mundanas, particularmente del continuo desempleo y los salarios estancados. Así, la decreciente popularidad de Fujimori pudo haber puesto en jaque todo el proyecto.

Sin embargo el régimen de Fujimori demostró que todavía era capaz de arrebatarse la victoria de las garras de la derrota. Fue la crisis de los rehenes del MRTA lo que permitió poner la cuestión de la seguridad de nuevo en la agenda nacional, tema que ya había sido la punta de lanza del régimen fujimorista. Esto le ofreció a Fujimori una inigualable oportunidad para reafirmar discursivamente la eficacia de su política de «mano dura» y su rol como un líder eficiente que luchaba incansablemente contra el terrorismo. A su vez pudo nuevamente reafirmar su visión del «otro» terrorista como delincuentes que no respetaban a la vida humana, ahora con la crisis de los rehenes como ejemplo intachable de ello. Un análisis foucaultiano del poder sugiere que existe una brecha entre la teoría y la práctica del discurso hegemónico, y que en efecto, este sirve para reforzar la dominación al permitir que las élites reproduzcan el lenguaje y el discurso del poder incluso cuando están siendo desafiados o en plena crisis. En este caso, la crisis de los rehenes del MRTA representó una crisis política profunda para Fujimori y sus aliados, ya que cuestionaba de raíz el discurso oficial que afirmaba que el terrorismo había sido derrotado. A su vez, sin embargo, la toma de la residencia creó una coyuntura en la que el régimen podía reorientar y desplegar su discurso de dominación. Las tratativas por la liberación de los rehenes con el MRTA indicaban, una vez más, en el marco del discurso oficial, que la naturaleza de los terroristas solo podía ser aplacada, ahora y en el futuro, por medidas firmes y decisivas. También mostraban que el terrorismo continuaba siendo una amenaza seria que atentaba contra la paz y la estabilidad del Perú, por lo que el régimen volvía a hacer apología a la utilización que hubo antaño de medidas severas contra los insurgentes, y cómo las usarían en el futuro. De este modo, la toma de la residencia del embajador por parte del MRTA le concedió a Fujimori la oportunidad y la posibilidad de reafirmarse discursivamente en relación con la necesidad de utilizar dichas medidas de mano dura.

Este discurso fue reforzado luego del ataque militar a la residencia con el objetivo de rescatar a los rehenes, el 27 de abril de 1997, que fue visto como un gran éxito. La autoridad de gobierno fue restablecida y las pérdidas humanas fueron mínimas: un rehén y dos comandos del Ejército murieron en la operación de rescate, aunque los catorce emerretistas perecieron; varios, según testigos, después de haberse rendido. En una súper publicitada grabación de video, aparece Fujimori subiendo las escaleras de la residencia, entre los cuerpos abaleados y desperdigados de los emerretistas. Él, con una mueca de satisfacción en la cara, luego de haber eliminado a los terroristas que retenían a 72 personas —y a su gobierno— por cuatro largos meses. El apoyo a Fujimori se incrementó de 38 a 67% después de la incursión militar (Fennell 1997: 38-41).

La Operación Chavín de Huántar fue percibida como un éxito tanto dentro como fuera del Perú. Ello reforzó el discurso del régimen acerca de la eficacia de las medidas de «mano dura» para luchar contra la subversión. Fujimori, con el pecho hinchado, declaró su papel predominante en la nueva derrota contra el terrorismo: «Yo estuve en permanente contacto con el Servicio de Inteligencia. Nosotros sabíamos perfectamente la ubicación de los terroristas y de la mayoría de rehenes». Luego dio la señal para iniciar el ataque (Fennell 1997: 38-41). Además, Fujimori criticó de cobardes a funcionarios del gobierno japonés que

promovieron negociaciones pacíficas con los dirigentes del MRTA, e incluso ofrecieron a pagar dinero de rescate para asegurar la liberación de sus dignatarios (Fennell 1997: 38-41). En efecto, el régimen obtuvo un éxito con doble filo: aun cuando afirmara discursivamente su triunfo contra el terrorismo, también podía utilizar la crisis de los rehenes como evidencia de que la amenaza terrorista seguía siendo real y que las medidas de mano dura servían de contrapeso para combatir la omnipresente posibilidad de un rebrote. De hecho, justo cuando la crisis de los rehenes terminó, Fujimori declaró de nuevo acerca de la eficacia de las medidas hechas con mano dura: «El terrorismo se ha infiltrado en todas partes... (el autogolpe fue necesario para establecer) la verdadera democracia en el Perú». ⁴⁰ Tal como diría Foucault, el poder, aun cuando desafiado, puede reproducirse.

Los cuatro largos meses que duró la crisis de los rehenes sirvieron para desviar la atención de las crecientes contradicciones que existían dentro del régimen fujimorista. Además del descontento popular por la economía y el proceso de reelección, había una creciente fricción entre los mismos partidarios del régimen. Algunos antiguos aliados suyos en la comunidad empresarial comenzaban a sentirse incómodos a causa de la continua centralización del poder y brutalidad por parte del gobierno. Esto se hizo evidente con el incremento de editoriales negativos del diario *El Comercio*, asociado tradicionalmente a la élite empresarial. ⁴¹ Baruch Ivcher, uno de los más firmes aliados del gobierno, dueño del canal 2 de televisión, empezó a emitir programas de noticias que revelaban la conducta criminal y corrupta del régimen. ⁴² Por ejemplo, documentó en un programa el descubrimiento del cuerpo mutilado de una ex agente de Inteligencia, Mariela Barreto; así como de la brutal tortura de otra, Leonor la Rosa. En el caso Barreto, la agente era supuestamente amante del mayor Santiago Martín Rivas, uno de los comandantes del Grupo Colina, un escuadrón de la muerte vinculado al Servicio de Inteligencia del Ejército (SIE) y el SIN. Ambas mujeres fueron salvajemente torturadas por haber filtrado información a la prensa acerca de los crímenes del régimen. Canal 2 también sacó al aire investigaciones documentando tanto los espionajes telefónicos perpetrados por el gobierno contra miembros de la oposición, como los altos e inexplicables ingresos de Vladimiro Montesinos. El gobierno montó una campaña acusando a Ivcher, que era naturalizado peruano, de contrabando de armas y traición a la patria. Con esta acusación le quitaron la ciudadanía y su canal de televisión. Por otra parte,

⁴⁰ *La República*, Base de Datos DESCO, 27 de mayo de 1996.

⁴¹ *El Comercio* también criticó el arresto del general en retiro, Rodolfo Robles, el 26 de noviembre de 1996. Un feroz crítico al gobierno en asuntos de violación a los derechos humanos y por el creciente poder que poseía el SIN, Robles después alegó que el SIN había detonado una bomba una estación de televisión en la ciudad de Puno. Fue acusado por una corte militar por insubordinación, insulto a un oficial superior y difamación de las Fuerzas Armadas. Críticas surgidas a partir del arresto obligaron a Fujimori prometer a Robles que sería liberado incluso si era hallado culpable. Esto se percibió como una escisión en las relaciones con los militares. Robles fue liberado el 7 de diciembre de 1996. (Véase Cameron 1997: 2.)

⁴² En 1991 el canal de televisión de Ivcher fue atacado con bombas por Sendero Luminoso. Esto motivó que se convirtiera en un partidario del régimen en asuntos de políticas contrainsurgentes. No obstante, empezó a preocuparse por el inmenso poder que estaba acumulando el asesor principal de Fujimori, Vladimiro Montesinos, ya que consideraba que sus prácticas corruptas y criminales socavaban los éxitos del gobierno fujimorista. Véase Bowen 2000.

en enero, el Tribunal Constitucional declaró que la ley aprobada por el Congreso que habilitaba a Fujimori para que postulara por tercera vez a la presidencia no podría ser aplicada en su caso, minando efectivamente su posibilidad de llegar a un tercer periodo. Esto reveló que el control del régimen sobre el Poder Judicial no era absoluto. Los tres jueces que cuestionaron la ley fueron objeto de una campaña de intimidación y, una semana después de la Operación Chavín de Huántar, el Congreso votó a favor de su destitución.

La crisis de los rehenes puso de nuevo sobre el tapete el tema de la seguridad interna. Como se afirmó anteriormente, Fujimori aprovechó la oportunidad de reafirmarse discursivamente en su papel de líder fuerte y eficiente, que combate con éxito el terrorismo. Los publicistas oficialistas, de manera hábil, pudieron evadir las críticas con respecto a la brecha de seguridad existente; en cambio, subrayaron la naturaleza terrorista de la toma de rehenes y el éxito de la operación militar de rescate. Irónicamente, la crisis de los rehenes permitió al régimen afirmar que el terrorismo —«prácticamente eliminado»— era un peligro omnipresente y que, por eso, las medidas de mano dura eran necesarias para tenerlo controlado. Las peligrosas inclinaciones del gobierno evidenciadas con el caso Ivcher, la matanza y la tortura de disidentes del régimen, y las violaciones a las autonomías judiciales y legislativas, para poder asegurar a Fujimori un tercer periodo como presidente, fueron escondidas debajo de la alfombra en el discurso oficial, que enfocaba estrictamente en el supuesto éxito del régimen en combatir el terrorismo. El discurso triunfalista del régimen jugó un rol de suma importancia para desacreditar e intimidar los crecientes movimientos opositores que luchaban contra la posibilidad de un tercer mandato de Fujimori.

Por último, es posible anotar que la crisis de los rehenes podría haber sido aprovechada por el régimen fujimorista para buscar una solución política al conflicto con el MRTA. Según Carlos Tapia, un experto en terrorismo y comisionado de la CVR, poco tiempo después de la Operación Chavín de Huántar:

[E]l Estado pudo haberse comprometido a discutir la liberación de los rehenes del MRTA, ya no como una concesión a cambio de la liberación de los rehenes, sino como un acto en favor de la reconciliación nacional y de afirmación de su voluntad de consolidar la paz interna. Y lo haría, precisamente, en resguardo de sus responsabilidades en el ámbito de la seguridad nacional. Con una condición: que el MRTA mostrara su disposición a abandonar el camino de la lucha armada (Tapia 1997).

La lógica de la política de mano dura del régimen hizo que se negara a negociar con el MRTA. Una victoria total contra el MRTA era la única solución dada por el régimen, pues dicha lógica estaba basada en una justicia vencedora.⁴³ De hecho, la crisis de los rehenes en sí misma reveló las consecuencias de los desaciertos de la política militarista del régimen. La acción del MRTA no representó un rebrote de dicha agrupación subversiva, sino un acto desesperado por parte de la cúpula, que quería tratar de resolver algunos problemas asociados a su derrota, tales como el duro régimen carcelario de los presos emeretistas (junto con los senderistas) padecían desde el autogolpe. Sin la posibilidad de realizar

⁴³ La página web de las Fuerzas Armadas retrata la Operación Chavín de Huántar como una victoria militar. Pone como virtud el no haber negociado con terroristas. La página web de las Fuerzas Armadas, «Chavín de Huántar. Lección de Unión y Coraje al Servicio al Perú», <<http://www.ejercito.mil.pe/destacados/chavin/chavin.htm>>. Consultada el 17 de octubre de 2005.

negociaciones pacíficas con el régimen, los líderes del MRTA —como Néstor Cerpa Cartolini, el autor intelectual de la toma de la residencia— decidieron que la única forma de atender sus demandas era a través de la violencia.

Con nosotros o contra nosotros: el terrorismo y la elección impugnada de 2000

La crisis de los rehenes le dio al régimen un tiempo de calma para lidiar con las consecuencias de la creciente oposición al proyecto autoritario y a las fisuras emergentes dentro de su poder de base. En especial, las tácticas autoritarias, las violaciones a los derechos humanos, y la vehemencia a cualquier costo para asegurar el tercer mandato a Fujimori, provocaron que la oposición creciera y se convirtiera en un duro escollo para las ambiciones del régimen.⁴⁴ Los estrategas del régimen desplegaron una serie de vías, incluidas el espionaje y la intimidación, para controlar a la creciente oposición. Otra táctica del régimen para desacreditar a la oposición era acusarlos de simpatizantes del terrorismo. Eso se hizo posible debido al control que tenía el régimen sobre los principales medios escritos y televisivos. Estos sirvieron de soporte para injuriar a los movimientos de la oposición, así como a sus líderes acusándolos de tener simpatías con los terroristas. En este punto el régimen estaba jugando a la política con el terror de un modo distinto: debía revivir los éxitos contrainsurgentes del régimen para poder ganar más votos de los electores. Sobre todo ahora que había aumentado el uso del miedo y la intimidación. Era común que los movimientos de oposición fueran asociados con el terrorismo en un esfuerzo para desacreditarlos y conservarse en el poder.

La oposición fue bastante limitada durante el primer periodo del régimen fujimorista. La represión y el miedo sofocaron las protestas. Los primeros signos de oposición organizada emergieron a partir de 1997, en respuesta a la destitución de los jueces del Tribunal Constitucional; esto llevó a que diversos grupos de oposición —estudiantes universitarios, organizaciones de derechos humanos, grupos de la sociedad civil como el Foro Democrático y la oposición legislativa— forjaran una alianza para desafiar la ley autoritaria que permitía a Fujimori postular por tercera vez consecutiva al cargo de presidente. Si se alcanzaba el número exigido de firmantes, la ley podía ser sometida a referéndum, y en ese caso podía ser anulada. Esto motivaría a que Fujimori estuviera impedido de postular para las elecciones de 2000. Luego de un año la oposición obtuvo más de un millón de firmas. No obstante, la mayoría oficialista del Congreso conspiró para vetar el referéndum. Las protestas fueron duramente reprimidas.

⁴⁴ Hace tiempo O'Donnell (1979: 285-318) identificó que el problema inherente de legitimidad que enfrentan los regímenes autoritarios. La particularidad del régimen fujimorista era su necesidad de mantener una careta democrática, ya que el intento de gobernar como una dictadura tradicional (el autogolpe de 1992) fue objeto de fuertes críticas internacionales, especialmente desde los Estados Unidos. Por mucho tiempo Washington apoyó a las dictaduras de los regímenes militares en América Latina. Cambios de política en la década de 1980 llevaron a que se rechazara ese tipo de tácticas, y que impere la nueva premisa de «mercados libres y elecciones libres». Así, la política internacional impuso restricciones al proyecto autoritario del régimen fujimorista. Impuso la necesidad de retener una careta legal. Véase Rospigliosi 1996 y Burt 1998.

De manera dialéctica, la violencia y la represión perpetradas por el régimen, y su continuo abuso de autoridad, provocaron que la oposición creciera ampliamente. En 1999, grupos de derechos humanos, estudiantes universitarios, grupos democráticos y la oposición legislativa comenzaron a articular un frente ético contra el régimen fujimorista, sus prácticas autoritarias y su abuso de autoridad. La recuperación de la democracia se volvió el eje temático que cohesionaba a la mayor parte de los movimientos posibles.⁴⁵ Este movimiento fue pequeño y predominantemente de clase media; sin embargo fue capaz de desafiar la base legal de la implacable maquinaria fujimorista, sedienta por lograr la re-reelección (Youngers 1999: 6-10). De esta forma se creó un espacio público, crucial para cuestionar la legitimidad del régimen y sus tácticas. Esto sirvió como catalizador para que los movimientos ajenos al gobierno se opusieran al fraudulento proceso electoral del año 2000.⁴⁶

Hacia finales de los años noventa el ocaso tanto de Sendero Luminoso como del MRTA hizo que el discurso oficial aquí analizado se tornara menos convincente. En esta coyuntura, las medidas autoritarias —alguna vez consideradas justificadas en un contexto de guerra contra Sendero Luminoso— fueron percibidas por grandes segmentos de la sociedad civil, cada vez más, como una práctica obsoleta (Burt 2006). Un cambio moderado se veía venir, en tanto que el miedo al terrorismo estaba siendo reemplazado por el sentimiento de indignación de la gente, al ver cómo el régimen había manipulado el miedo para preservar en el poder un sistema autocrático y corrupto.

En una coyuntura de efervescencia opositora, el régimen una vez más jugó la carta del terrorismo, pues manipuló con el miedo y utilizó tácticas de intimidación para rechazar a la oposición. Se pueden percibir dos tipos de estrategia en este periodo. Primero, el régimen buscó reafirmar su éxito en el frente contrainsurgente. Por ejemplo, sobredimensionó las capturas de dirigentes senderistas de segundo orden. Esto hizo recordar a los ciudadanos la amenaza latente de los terroristas y cómo el régimen combatió a los insurgentes. Además, quiso retratar esas capturas como muestras de la diligente tarea de las Fuerzas Armadas y el Servicio de Inteligencia, cosa que no era el caso.

El 1 de noviembre de 1998, un noticiero presentó un reportaje sobre la camarada Rita. Allí se informó que fue arrestada luego de haber sido entregada por sus propios subordinados. Sin embargo, al día siguiente Fujimori dio una conferencia de prensa donde declaró que la captura de Rita era el resultado de una operación militar conducida por las Fuerzas Armadas y el SIN. Una semana después otro noticiero sacó al aire una grabación que se suponía era la heroica captura de Rita por las fuerzas de seguridad. Luego de estas imágenes hubo entrevistas con oficiales de las Fuerzas Armadas contando detalles de la operación. De hecho, todo era un montaje diseñado para simular la victoria militar contra los remanentes de Sendero Luminoso. Un informe de investigación se publicó en *La República* pocos días después. Allí se presentó evidencia que corroboraba la primera versión de la historia: Rita había sido arrestada no por

⁴⁵ Si se quiere enfocar en las movilizaciones de los movimientos sociales, véase Tarrow 1998.

⁴⁶ Para un análisis más profundo acerca de la oposición del proceso electoral de 2000, véase Conaghan 2001. Acerca de la evolución del movimiento de derechos humanos, su cambio de enfoque sobre la democracia a fines de los años noventa, y el papel que jugó en el movimiento de oposición, véase Youngers 2003.

una operación militar, sino porque sus camaradas la habían entregado. En general, este régimen —y sus colaboradores mediáticos— estaban fabricando «victorias» militares para mejorar su imagen como implacables cazadores de terroristas (Rospigliosi 2000).⁴⁷

Otro *show* mediático similar se montó en julio del año siguiente con la captura de Óscar Ramírez Durand, alias Feliciano, el presunto líder de Sendero Rojo. Esa fracción insurgente rechazó el llamado de paz de Guzmán y continuó con las actividades subversivas. Feliciano fue arrestado por un oficial de policía, pero la versión oficial dice que fue debido a una operación militar llevada a cabo por las Fuerzas Armadas y el SIN con apoyo de la policía. Por un lado, los críticos acusaron al gobierno de manipular el arresto de Feliciano con fines electorales, además de atribuir la derrota del terrorismo a las Fuerzas Armadas y al Servicio de Inteligencia (Degregori 1999b: 31), del mismo modo como Vladimiro Montesinos se llevó todo el crédito por la captura de Guzmán, en lugar de Ketín Vidal, de la DINCOTE.⁴⁸

Las publicitadas capturas de Rita y Feliciano permitieron al régimen afirmar de forma simultánea la persistencia de la amenaza terrorista y el éxito de haber contrarrestado dicha amenaza. El caso de Feliciano fue de suma importancia para las elecciones que se avecinaban en el año 2000, dado que permitió al régimen destacar sus éxitos en la guerra contrainsurgente y reivindicar la figura de Fujimori como el salvador de la nación (Rospigliosi 2000, Degregori 2000).

La segunda estrategia desplegada en este periodo fue la de socavar la credibilidad de la oposición al asociarla discursivamente con el terrorismo. Ello afectó a la mayoría de movimientos sociales y contestatarios que fueron emergiendo y no acataban las políticas autoritarias y los abusos a los derechos humanos. El régimen también menoscabó la imagen de los líderes de la oposición democrática que competían en las elecciones. Esto sucedió porque Montesinos extorsionaba y manejaba una red de corrupción que compraba la línea editorial de medios televisivos y escritos.⁴⁹ Sin embargo, hubo medios que se mantuvieron independientes, tales como *La República* y *El Comercio*. No ocurrió lo mismo en el caso de los medios electrónicos, pues el gobierno llegó a controlar virtualmente a todos, con excepción de Canal N, que se emitía por cable. La prensa amarilla, que apareció en esta época, fue una creación del SIN. Es importante notar que los periodistas, que mantuvieron su independencia e investigaban las fisuras del gobierno, fueron muchas veces objeto de intimidación, además de recibir constantes amenazas de muerte.

Fujimori tuvo dos contrincantes claves en las elecciones de 2000: Alberto Andrade, alcalde de Lima en dos oportunidades, un competente y eficiente administrador; y Luis Castañeda Lossio, el arquitecto de la exitosa reforma del seguro social. El régimen difundió una campaña masiva para desacreditar a ambos líderes ante los ojos de la opinión pública. Esta campaña tuvo múltiples

⁴⁷ Rospigliosi sostiene que no fue un caso de manipulación mediática, sino de colaboración activa por parte de la prensa para preparar una atmósfera de desinformación. Los numerosos videos que registran a Montesinos interactuando con muchos magnates y ejecutivos peruanos lo demuestran.

⁴⁸ Para un análisis más exhaustivo acerca de los diferentes tipos de desinformación y manipulación de la opinión pública utilizada por el régimen entre 1998 y 2000, véase Rospigliosi 2000.

⁴⁹ Para un análisis más exhaustivo acerca del control mediático por parte del gobierno véase Degregori 2000, Rospigliosi 2000 y CVR 2003.

dimensiones, incluyendo la difamación masiva e incesante (véase Degregori 2000). En este punto, hay que enfocar la cuestión de la manipulación del terrorismo. Los estrategias psicosociales del régimen retrataron a ambos líderes de la oposición como «mansos» ante el terrorismo o como virtuales simpatizantes de la subversión. Cuando Castañeda sugirió que el gobierno de Fujimori debía someterse a los estatutos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, para volver a efectuar un nuevo proceso a cuatro chilenos vinculados con el MRTA —dado que fueron enjuiciados por una corte militar que no les garantizó un juicio justo—, fue tildado de simpatizante del terrorismo. El titular del diario sensacionalista *El Chino*, del 29 de septiembre de 1999, dice lo siguiente: «Terroristas chilenos apoyaron a Castañeda Lossio. Él ha prometido imponer sus demandas al país», y el 15 de octubre de 1999: «Para Castañeda Lossio los terroristas no son nuestros enemigos. Ellos deben tener nuevos juicios, 10.000 dólares y mucha comprensión» (Degregori 2000: 159). Después de varios meses de calumniarlos, el régimen había podido neutralizar a ambos candidatos.

En este contexto, Alejandro Toledo surgió como un candidato de oposición viable. Ni siquiera figuraba en las encuestas de opinión en 1999, pero como la oposición popular crecía y las evidencias que señalaban un probable fraude electoral estaban siendo recolectadas, la popularidad de Toledo se incrementó. Fujimori hubiera obtenido la mayoría de votos en la primera ronda si no hubiera sido por las siguientes razones: las protestas masivas; la documentación exhaustiva que probaba el fraude electoral, que estaba en camino; los observadores —de grupos como Transparencia y la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos— vigilando como sabuesos cada mesa de votación. Por estos motivos Fujimori se vio forzado a acceder a una segunda ronda frente a Toledo. Durante los dos meses que separaban a la primera de la segunda ronda el régimen armó una maquinaria para desprestigiar a Toledo, socavar su imagen pública y retratarlo como un simpatizante del terrorismo. El encabezado de un diario amarillista muestra la naturaleza de la campaña: «El toledismo continúa su campaña electoral de sabotaje. Al mismo estilo de Sendero Luminoso, Perú Posible busca impedir las elecciones con una espiral de violencia».⁵⁰ Toledo también era objeto de alusiones racistas, pues lo catalogaban de «cholo» que incita «el salvajismo».⁵¹ El discurso del régimen jugaba de forma descarada con los prejuicios raciales y clasistas. Esto ocurría cuando catalogaban a los terroristas como los «otros», que dominaron por tantos años la cultura popular. Sendero, por ejemplo, estaba asociado a lo «salvaje», a los «indios» y los «cholos» (Bourque y Warren 1989: 7-34).

El régimen usó tácticas similares para asociar movimientos sociales de protesta con el terrorismo. Los participantes de las protestas contra el régimen el día del referéndum, el 30 de septiembre de 1998, fueron representados por los medios del oficialismo como «salvajes» y «bestias». Incluso, en los encabezados de los periódicos los asociaron con el terrorismo: «Eso es cosa de bárbaros, no es una protesta. ¿Acaso hubo infiltrados terroristas?».⁵² Asimismo, cuando había protestas violentas, la prensa independiente reportaba que esto era el resultado de una decisión hecha por el gobierno al retirar adrede la seguridad policial del centro de Lima. Algunos militares se consternaron porque tuvieron órdenes de abstenerse de actuar en caso se produjeran actos de agresión; esto

⁵⁰ *Referendum*, 23 de mayo de 2000; Degregori 2000:174.

⁵¹ *La Chuchi*, 30 de mayo de 2000; Degregori 2000: 174.

⁵² *Expreso*, 1 de octubre de 1998.

ocasionó que las manifestaciones se tornaran violentas por la pasividad de las fuerzas del orden.⁵³ Estrategias similares fueron utilizadas el 28 de julio de 2000, en la «Marcha de los 4 Suyos» convocada por Toledo, el polémico día en que Fujimori inauguraba su ilegítimo tercer mandato. En un inicio hubo represión policial, pero luego la protesta avanzó con dirección al centro de Lima, mientras que las fuerzas de seguridad se retiraban. La marcha permaneció pacífica, pero un incendio en el Banco de la Nación provocó la muerte de cuatro guardianes. El régimen inmediatamente culpó a los manifestantes de haber ocasionado el incendio. El régimen trató de relacionar a la oposición con grupos sangrientos como Sendero. La oposición acusó al régimen de infiltrar manifestantes y de ser ellos los causantes del incendio, para luego poder desacreditarlos —una acusación que después resultó ser cierta— (CVR 2003). Este tipo de campañas mediáticas jugaron de manera deliberada y sistemática con los miedos existentes y las memorias de la violencia terrorista.

Conclusión

Durante el régimen fujimorista se priorizaron cambios en la política contrainsurgente, que sirvieron para poder derrotar a dos movimientos insurgentes. Hizo hincapié en el uso de la inteligencia para recolectar información que sirviera para descabezar las estructuras organizativas, y evitar tácticas de contrainsurgencia basadas en la violencia indiscriminada que en el pasado habían distanciado a la población rural de las Fuerzas Armadas y el Estado peruano (a pesar de que se seguía cometiendo violaciones a los derechos humanos a través de la desaparición forzada de personas, el asesinato selectivo, la detención arbitraria y la tortura). Las modificaciones que hubo en el ámbito de la contrainsurgencia dieron resultados: a fines de 1992 las cúpulas del MRTA y de Sendero fueron capturadas, sus principales estructuras organizativas desmanteladas, y muchos de sus seguidores fueron capturados o se rindieron ante las autoridades.

Fue una época de encrucijadas vitales para el desarrollo político en el Perú. Después de más de una década de conflicto interno, donde Sendero Luminoso perpetró brutales ataques contra las autoridades gubernamentales y la sociedad civil, así como sistemáticas violaciones a los derechos humanos cometidas por las fuerzas del orden en el transcurso de la guerra contrainsurgente, el país tuvo la oportunidad de consolidar una victoria contra el terror y la violencia al procurar formas para incorporar insurgentes que permanecieron en un segundo plano, desmovilizar milicias armadas, y buscar reducir los niveles de pobreza, desigualdad y exclusión que eran el caldo de cultivo de los movimientos insurgentes. En cambio, Fujimori y sus aliados procuraron utilizar las victorias políticas contra la subversión para justificar un proyecto neoliberal y autoritario concebido para largo plazo, garantizar la impunidad a los miembros de las Fuerzas Armadas, y forjar redes masivas de corrupción y compadrazgo.

En lugar de capitalizar sus éxitos en la guerra contrainsurgente y traer la paz definitiva, promover la reconciliación nacional en aras de establecer las bases para la unidad nacional y la ciudadanía, y reconstruir la gobernabilidad democrática; el régimen politizó la guerra contra el terror en su esfuerzo para consolidar el proyecto político y autoritario que posibilitara conservarse en el

⁵³ Información proveniente de Rospigliosi 2000.

poder. De este modo, el régimen perdió una oportunidad de que el país supere el miedo y la polarización tras tantos años de violencia; y buscó perpetuarse en el poder, garantizando la impunidad para los miembros de las fuerzas de seguridad y encubriendo el accionar ilegal de toda una mafia. Así, jugando a la política con el terror en el Perú, destruyó los cimientos de la política democrática. Permitted que continúen negándose las libertades tanto civiles como políticas en un contexto de guerra contrainsurgente, incluso cuando la real amenaza terrorista ya había desaparecido. La justificación de las prácticas políticas y autoritarias proporcionó la protección para que instaurara una extensa maquinaria de corrupción, que recién fue revelada cuando el régimen comenzó a decaer. Esto evidencia hasta qué punto el gobierno controlaba todas las instancias mediáticas, sumado a la conspiración existente entre los medios de comunicación con los sectores elitistas del régimen.

Al jugar a la política con el terror, el régimen fujimorista desperdició una oportunidad crítica para finalizar de una vez por todas con los movimientos insurgentes, particularmente, con la cruenta agrupación senderista. Desde su captura Guzmán buscó formas para impedir que su organización fuese eliminada del mapa. La manipulación política del gobierno respecto a la propuesta de un acuerdo de paz hecha por Guzmán, le dio a este la oportunidad de dirigirse a sus huestes para ordenar una retirada organizada de la acción armada hacia una actividad política de baja intensidad, muy parecidas a las tácticas que Sendero usó en la década de 1970 para afirmar su presencia en la sociedad antes de lanzar su guerra popular en 1980. Está claro que en la actualidad no hay posibilidad para que Sendero vuelva a ser una amenaza significativa para el Estado peruano, ni siquiera en el mediano plazo. Sin embargo, que la organización haya podido reconstituirse, haya desarrollado una estrategia política definida y que opere en distintos escenarios, tales como en las universidades, los pueblos jóvenes y remotas áreas rurales a lo largo del país, es de por sí alarmante. Puede que ahora Sendero no alcance la capacidad de movilización —y de poner en jaque al Estado peruano— que tuvo en los años ochenta, pero podría atrincherarse en ciertas zonas, y de esta manera contribuiría a la balcanización de la sociedad y políticas peruanas. Otro aspecto preocupante es que el país todavía no ha podido lidiar cabalmente con su pasado —a pesar del excelente trabajo hecho por la Comisión de la Verdad y Reconciliación, cuyo informe final fue presentado en 2003—. Esta incapacidad del país en conjunto permite que —hasta hoy en día— las élites de gobierno continúen jugando a la política con el terror cuando se enfrentan con legítimas protestas sociales.

Bibliografía

BOURQUE, SUSAN Y KAY WARREN

1984 «DEMOCRACY WITHOUT PEACE: THE CULTURAL POLITICS OF TERROR IN PERU». *Latin American Research Review*, vol. 24, N° 1, pp. 7-34.

Bowen, Sally

2000 *The Fujimori File: Peru and Its President 1990-2000*. Lima: Monitor.

Burt, Jo-Marie

1998 «Unsettled Accounts: Militarization and Memory in Postwar Perú». *NACLA, Report on the Americas*, 32:2.

- 2004 «State-making Against Democracy: The Case of Fujimori's Peru». En Jo-Marie Burt y Philip Mauceri (editores). *Politics in the Andes: Identity, Conflict, Reform*. Pittsburgh: University of Pittsburgh Press.
- 2005 «Plotting Fear: The Uses of Terror in Peru». *NACLA Report on the Americas*, 28:6, pp. 32-37.
- 2006 «Quien habla de terrorista: The Political Use of Fear in Fujimori's Perú». *Latin American Research Review*, 41:3, pp. 32-62.
- BURT, Jo-Marie y José LÓPEZ RICCI
1994 «Shining Path after Guzmán». *NACLA Report on the Americas*, 28:3, pp. 6-10.
- CAMERON, Maxwell
1997 «Arrest of retired general detonates civil-military rift in Peru». *NACLA Report on the Americas*, 30:4, p. 2.
- CARRIÓN, Julio
1998 «La popularidad de Fujimori en Tiempos Ordinarios, 1993-1997». En Fernando Tuesta Soldevilla. *El juego político: Fujimori, la oposición y las reglas*. Lima: Fundación Friedrich Ebert.
- CHOMSKY, Noam y Edward S. HERMAN
1988 *Manufacturing Consent: A Political Economy of the Mass Media*, Nueva York: Pantheon.
- COLLIER, David (editor)
1979 *The New Authoritarianism in Latin America*. Princeton: Princeton University Press.
- CONAGHAN, Catherine
2001 «Making and Unmaking Authoritarian Peru: Re-election, Resistance and Regime Transition». *The North-South Agenda Papers*, N° 47, May.
- COORDINADORA NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS (CNDDHH)
1994 *Que no vuelva el horror*, Lima,
Informe anual de la situación de derechos humanos. Lima (varios años)
- COMISIÓN DE LA VERDAD Y RECONCILIACIÓN (CVR)
2003 *Informe Final* Lima: Comisión de la Verdad y Reconciliación. Disponible en: <<http://www.cverdad.org.pe>>.
- DEGREGORI, Carlos Iván
1999a «Cosechando tempestades: las rondas campesinas y la derrota de Sendero Luminoso en Ayacucho». En S. Stern (editor). *Los senderos insólitos del Perú: guerra y sociedad, 1980 -1995*. Lima: Instituto de Estudios Peruanos, pp. 133-159.
1999b «La captura de Feliciano y la batalla por la memoria». *Ideele*, N° 121, p. 31.
2000 *La década de la antipolítica. Auge y huida de Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos* Lima: Instituto de Estudios Peruanos.
- DEGREGORI, Carlos Iván y Carlos RIVERA
1993 *Fuerzas Armadas, subversión y democracia: 1980-1993*. Lima: Instituto de Estudios Peruanos.
- DE LA JARA BASOMBRIÓ, Ernesto
2001 *Memoria y batallas en nombre de los inocentes. Perú 1992-2001*. Lima: Instituto de Defensa Legal.

FENNELL, Tom

1997 «Rescue in Lima: A bold assault sends a message to terrorists». *Canadian Business and Current Affairs*, 110:18, 5 de mayo, pp. 38-41.

FOUCAULT, Michel

1970 *La Arqueología del Saber*. Siglo XXI, México.

1980 *Discipline and Punish. The Birth of the Prison*. New York: Vintage Books.

HUMAN RIGHTS WATCH

1984 *Abdicating Democratic Authority: Human Rights in Peru*. Nueva York.

1995 *Peru: The Two Faces of Justice*. New York.

O'DONNELL, Guillermo

1979 «Tensions in the Bureaucratic-Authoritarian State and the Question of Democracy». En D. Collier (editor). *The New Authoritarianism in Latin America*. Princeton: Princeton University Press, pp. 285-318.

ROBERTS, Kenneth

1995 «Neoliberalism and the Transformation of Populism in Latin America: The Peruvian Case». *World Politics*, N° 48, pp. 82-116.

ROJAS PÉREZ, Isaías

1995 «Sendero(s) Luminoso(s): Guerra de supervivencia». *Ideele*, 82-83, pp. 98-105.

ROSPIGLIOSI, Fernando

1996 *Las fuerzas armadas y el 5 de abril. La percepción de la amenaza subversiva como una motivación golpista*. Documento de Trabajo 73. Lima: Instituto de Estudios Peruanos.

2000 *El arte del engaño: las relaciones entre los militares y la prensa*, Lima: APRODEH.

STERN, Steve (editor)

1999 *Los senderos insólitos del Perú: guerra y sociedad, 1980-1995*. Lima: Instituto de Estudios Peruanos.

TAPIA, Carlos

1997 *Fuerzas Armadas y Sendero Luminoso: dos estrategias y un final* Lima: Instituto de Estudios Peruanos.

TARROW, Sidney

1998 *Power in Movement: Social Movements and Contentious Politics*. New York: Cambridge University Press.

TUESTA SOLDEVILLA, Fernando

1994 *Perú político en cifras*, Lima: Fundación Friedrich Ebert.

TUESTA SOLDEVILLA, Fernando (editor)

1998 *El juego político: Fujimori, la oposición y las reglas*, Lima: Fundación Friedrich Ebert.

YOUNGERS, Coletta

1999 «Fujimori's Relentless Pursuit of Re-election». *NACLA Report on the Americas*, 33:4, pp. 6-10.

2003 *Violencia política y sociedad civil en el Perú. Historia de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos*. Lima: Instituto de Estudios Peruanos.